**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D.C. ocho (8) de septiembre de dos veinte (2020)

Referencia 11001 40 03 057 2020 0456 00 Acción de Tutela

Se procede a emitir el fallo correspondiente dentro de la acción de tutela del epígrafe.

ANTECEDENTES

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política de Colombia, en concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el inciso 1, artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017, este Despacho Judicial es competente para tramitar la acción de tutela presentada por la señora Dennys Adriana Valencia Munevar en representación de su hija Ana María Pedraza Valencia, contra American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición y educación.

2. La situación fáctica planteada por la actora, se resumen de la siguiente manera:

2.1. El 9 de marzo de 2018, la señora Dennys Adriana Valencia Munevar matriculó a su hija Ana María Pedraza Valencia en American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS, para tomar clases de inglés.

2.2. El 8 de julio de 2019, procedió a matricular a su hija María Juliana Pedraza Valencia al mismo programa académico ante la entidad accionada, consignándose en el formato de matrícula No. ALM 1974 que esta es referida de Ana María Pedraza Valencia.

2.3. El 3 de marzo de 2020, recibió un correo de la entidad accionada donde se le indicó que debía aumentar la vigencia del programa académico de Ana María Pedraza Valencia, pues estaba por vencerse en el mes de abril de 2020.

2.4. El 5 de marzo, dio contestación a dicho requerimiento, precisándose que la vigencia de la matrícula debía ser ampliada de forma automática, ya que en la matrícula de María Juliana Pedraza Valencia se refirió a Ana María Pedraza Valencia.

2.5. El 12 de marzo de 2020, recibió respuesta de la entidad accionada donde se le indicó que dicho beneficio sólo se puede reclamar dentro de los 30 días calendarios posteriores a la nueva matrícula, información que se omitió al momento de sentar el registro académico, considerándolo como una publicidad engañosa.

2.6. El 17 de marzo de 2020, se radicó derecho de petición ante la entidad cuestionada, solicitando el aumento de la vigencia de la matrícula de Ana María Pedraza Valencia, el que a la data de la presentación de la queja constitucional no ha sido absuelto.

2.7. El 4 de agosto de 2020, se bloqueó en el sistema el usuario de Ana María Pedraza Valencia, impidiéndole recibir las clases y el desarrollo de los ejercicios prácticos.

3. Pretende a través de esta queja el amparo de los derechos fundamentales de petición y educación de Ana María Pedraza Valencia, y como consecuencia

de ello se le ordene a American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS, para que “....autorice el aumento de vigencia de la matrícula No. 37839 de Ana María Pedraza Valencia por referido en la matrícula No. ALM1974 de su hermana María Juliana Pedraza...”.

TRAMITE PROCESAL

2.1. Este Despacho Judicial avocó conocimiento de la acción constitucional mediante proveído de 27 de agosto del año que avanza ordenándose la notificación de la cuestionada American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS, y la vinculación de la secretaria de Educación.

2.1. Surtida en debida forma la notificación de American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS, procedió a dar contestación a la queja constitucional. En síntesis manifestó, que el 31 de agosto de 2020, se respondió a la petición elevada por la quejosa, accediéndose a la pretensión de extensión de la vigencia de la matrícula de Ana María Pedraza Valencia, lo que implica que se configura el precepto de hecho superado.

2.3. La secretaria de Educación Distrital señaló, que las controversias suscitadas entre las partes en contienda deben ser dirimidas por la jurisdicción ordinaria, pues se trata de un contrato privado de prestaciones servicio de educación. No obstante, también puede ser expuesto ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quienes podrán imponer multa a las instituciones educativas que infrinjan los artículos 26, 29, 30, 32 y 33 de la Ley 1480 de 2011. Finalmente, precisó que contra la cuestionada American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS no obra queja alguna por los hechos narrados en la acción de tutela, y tiene licencia de funcionamiento vigente.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela consagrada en la Constitución Política de 1991, se creó como una vía sumaria, preferente, y perentoria para proteger los derechos fundamentales, que hayan sido amenazados o violentados por las autoridades públicas o los particulares. En dicho evento, cualquier sujeto que se encuentre en estado de indefensión y al que se pueda causar un perjuicio irremediable, podrá acudir al juez constitucional en defensa de la prerrogativa conculcada como mecanismo transitorio, siempre y cuando no disponga de otro medio de defensa judicial. La vía constitucional no sustituye los mecanismos ordinarios principales, ni modifica las reglas de la competencia de los jueces, ni crea instancias adicionales a las existentes.

2. El problema jurídico a dilucidar, se circunscribe a verificar si la cuestionada American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS, ha vulnerado el derecho fundamental de petición y educación de Ana María Pedraza Valencia representada por la señora Dennys Adriana Valencia Munevar.

3. Preliminarmente cabe decir, que el artículo 44 de la Constitución Política dispone que la educación es un derecho fundamental que tiene cada niño, el cual incorpora dentro de su núcleo esencial el “*acceso y permanencia*”,¹ de ahí la importancia que éste sea de aplicación inmediata, con el fin de garantizar la existencia del Estado Social de Derecho.

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-675/02.

Fue consagrado como fundamental en la Constitución Política (art. 67), señalando que se trata de un servicio público con una trascendental función social, al formar de manera ejemplar al ciudadano, el cual debe ser proporcionado por el Estado, la Sociedad y la Familia. La prestación de este servicio se muestra violatoria del derecho principal citado, solo en aquellos casos en los cuales los educandos se encuentran en situación tal que la finalidad propia del mismo quede por completo insatisfecha, esto es, cuando el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura resulte ajeno a la actividad que se realice. La vulneración directa o eventual, exige como precondition, para que opere la tutela como instrumento excepcional, que su quebrantamiento o amenaza, además de ser un hecho cierto, tenga la entidad suficiente como para afectar en forma grave su existencia. No cualquier desconocimiento ni amenaza, puede tomarse como causa determinante y justificativa del amparo constitucional, solo aquella que evidencie un daño esencial del núcleo del derecho, de manera que resulte imposible o difícil su ejercicio por el titular.

4. El derecho de petición, como una prerrogativa fundamental expresamente consagrada en el artículo 23 de la Carta Política de Colombia, surge como un mecanismo para obtener una respuesta por parte de una autoridad pública o privada, cuya decisión debe ser de fondo, clara y precisa. Los pronunciamientos tardíos y ambiguos no constituyen una contestación efectiva, ya que lesionan el núcleo esencial de dicho derecho, puesto que no se obtiene una solución a lo peticionado.²

La Jurisprudencia Constitucional ha identificado, que el núcleo esencial del derecho de petición incluye: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar en términos respetuosos solicitudes ante las autoridades públicas y los particulares; b) el destinatario tiene la obligación de tramitar y resolver las peticiones incoadas dentro de los términos señalados por la Ley; c) la resolución debe ser clara, precisa y consecuente con las peticiones elevadas, no es admisible las respuestas evasivas; d) el contenido de la respuesta puede ser favorable o desfavorable a lo pedido; y e) se debe notificar la contestación dada, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso.³

Ahora bien, frente a los términos para resolver los derechos de petición, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 prevé que las peticiones de orden general deberán resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Exceptuando las peticiones de documentos y de información que deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Términos que fueron modificados dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica desatada por la pandemia del coronavirus del Covid – 19. El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, señala que todas las peticiones que se presente durante tiempo que dure la emergencia deberán resolverse dentro de los (30) días siguientes a su recepción. Las que sólo se traten de peticiones de documentos y de información se resolverán dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

De igual forma, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha precisado que los elementos estructurales del derecho de petición, se limitan a establecer que: (i) toda persona natural y/o jurídica podrá presentar peticiones respetuosas de interés general o particular, (ii) la solicitud podrá realizarse de forma verbal o escrita, y (iii) no se requiere invocar una técnica específica para incoarlo.⁴

² Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

³ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243), ene. 28/15, C. P. Álvaro Namén Vargas
⁴ "...Elementos que conforman el derecho fundamental de petición (...) Esta Corporación se ha pronunciado sobre los elementos estructurales que componen el derecho de petición. Particularmente, en la sentencia C-818 de 2011, reiterada por la C-951 de 2014, se refirió a los siguientes elementos: (...) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general (...) Tanto las personas naturales como las jurídicas son titulares del derecho fundamental de petición (...) La petición puede ser verbal o escrita (...) La Corte ha

5. En el caso concreto, la accionante Dennys Adriana Valencia Munevar en representación de su hija Ana María Pedraza Valencia dijo, que el 17 de marzo de los corrientes, radicó ante American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS derecho de petición, consistente en que, *“..autoricen el aumento de vigencia por referido de mi hija Ana María Pedraza Valencia (...) por vencimiento de la vigencia de la matrícula No. 378339 la cual tiene fecha según el documento hasta junio 20 de 2020, y la plataforma de cada vez que pide clases le informa que la vigencia es hasta el 28 de marzo de 2020...”*.

Ahora bien, una vez revisada la documental allegada al plenario, se advierte que el derecho de petición de data 17 de marzo de los corrientes, fue presentado por el señor Nelson Eduardo Tula en representación su hija Ana María Pedraza Valencia ante American School Way SAS – Institución Americano para el Trabajo y el Desarrollo SAS, quien al ejercer su derecho de defensa y contradicción, al momento de contestar la acción de tutela, indicó que el pasado 31 de julio de los corrientes dio respuesta el requerimiento de la actora, allegando los pantallazos de remisión del correo electrónico indicado en el escrito introductor, y la constancia de aumento de la vigencia de la matrícula de Ana María Pedraza Valencia hasta el 17 de diciembre de 2021. Manifestación que fue confirmada por la actora, mediante conversación telefónica sostenida con uno de los empleados del Juzgado.

Bajo dicha primicia, se tiene que el citado requerimiento no fue contestado en términos, pues fíjese que el lapso de tiempo que tiene la encartada, de acuerdo a lo previsto en la norma en cita,⁵ y en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 dictado por el Gobierno Nacional dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica,⁶ aunado a la naturaleza el requerimiento, corresponde a los treinta (30) días siguientes a la recepción del competente, es decir, que al momento de la interposición de esta tutela, que fue el día 27 de agosto de 2020 (ver Acta Individual de Reparto) ya se había vencido dicho lapso, el cual, en todo caso culminó el 4 de mayo del año que avanza.

Con todo y lo anterior, es menester precisar que que la reclamación interpuesta fue debidamente atendida por la acusada, en la medida que se absolvió la solicitud principal presentada a favor de la menor Ana María Pedraza Valencia, pues se advirtió que se ampliaría la vigencia de su matrícula hasta el 17 de diciembre de 2021. Circunstancia, que se iterar, fue confirmada por la señora Dennys Adriana Valencia Munevar, quien manifestó que ya se renovó con normalidad la matrícula y las clases de su hija.

Por lo tanto, si hubo vulneración o amenaza a los derechos incoados, este cesó al momento de contestarse el requerimiento, en consecuencia no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inocua. De esta manera, se configura el hecho superado, pues la aludida pretensión se encuentra satisfecha y los derechos a salvo.⁷

señalado que el artículo 23 de la Norma Superior no hace ninguna diferenciación entre las peticiones presentadas de forma verbal y las escritas, en esa medida los dos tipos de solicitudes se encuentran amparadas por el derecho fundamental de petición (...) Las peticiones deben ser formuladas de manera respetuosa (...) Este Tribunal ha establecido que las solicitudes solo tienen el amparo constitucional cuando son presentadas en términos respetuosos. Particularmente la sentencia T-353 de 2000, resaltó el deber de respeto a la autoridad ante la cual se presenta la petición, pues de lo contrario la obligación de responder no nace a la vida jurídica. En este sentido, de forma excepcional es posible rechazar una solicitud que se considere irrespetuosa, sin embargo, esta interpretación es restrictiva, en consideración a que no toda petición puede tacharse de esa manera para sustraerse de la obligación de dar una respuesta de fondo (...) La informalidad de la petición (...) La Corte ha insistido en diferentes oportunidades que el derecho de petición se ejerce a pesar de que las personas no lo digan de forma expresa. En este sentido, si una autoridad exige que se diga específicamente que se presenta una solicitud de petición en ejercicio de este derecho, impone al ciudadano una carga que no se encuentra prevista en la ley ni en la Constitución Política...”. Sentencia 238 de 2018.

⁵ “... Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente...”.

⁶ Estado de Emergencia prorrogado hasta el día 30 de noviembre de 2020, de acuerdo a la Resolución 1462 de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Consulta efectuada de la página web del citado Ministerio.

<https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mediante-resolucion-se-extiende-emergencia-sanitaria-en-Colombia.aspx#:~:text=%E2%80%8BLa%20Resoluci%C3%B3n%201462%20contempla,el%20pr%C3%B3ximo%2030%20de%20noviembre.&text=Bogot%C3%A1%2C%2026%20de%20agosto%20de,el%20pr%C3%B3ximo%2030%20de%20noviembre.>

⁷ Sentencia T-041 de 2016.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por Dennys Adriana Valencia Munevar en representación de su hija Ana María Pedraza Valencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR en su oportunidad las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en el evento que no fuere impugnado.

NOTIFÍQUESE,

**MARLENNE ARANDA CASTILLO
JUEZ**

Firmado Por:

**MARLENE ARANDA CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**7ca0ce8aa2b310bbf1aa03c76b9208cde98eeda7e6da81eaabb988312f43b
5d4**

Documento generado en 08/09/2020 10:14:07 a.m.